

edp

C.A. de Valparaíso

Valparaíso, treinta de abril de dos mil veintidós.

**VISTOS:**

A folio 1, comparece Cristian Santander Garrido, abogado, en representación de **Horacio Demetrio Valdivia Meza**, demandado en causa Rit A-37-2019, caratulados “AFP Capital S.A. con Sociedad Valdivia Callehuanca y Compañía Limitada”, juicio ejecutivo por cobro de cotizaciones previsionales, seguido ante el **Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso**, por quien recurre de amparo contra el señalado Juzgado, y denuncia como acto ilegal una orden de arresto despachada en dicha causa en su contra, como representante legal de la empresa demandada, la que solicita sea dejada sin efecto, por las razones que expone.

Señala que en la causa ya referida, AFP Capital inició cobranza ejecutiva por cotizaciones previsionales devengadas desde agosto de 1998 a septiembre de 2003, respecto de una trabajadora, María Sonia Alvarado Vargas, quien prestó servicios en aquella época. Esto es, se trata de cotizaciones devengadas hace más de 20 años, respecto de las cuales el acreedor salió de su inactividad recién el 2019. De esa forma, la deuda original de \$1.049.756 por efectos de intereses y multas, asciende hoy a \$63.967.399, suma manifiestamente desproporcionada a la deuda original, la que corresponde solo al 2% de la deuda actual.

Indica que la deuda de autos está prescrita, pues el artículo 19 del Decreto Ley N°3500 dispone que el plazo para ejercer las acciones de cobro de las cotizaciones previsionales devengadas es de 5 años desde la terminación de los servicios, que en este caso sucedió en septiembre de 2003, es decir, las acciones de cobro prescribieron en septiembre de 2008. La demanda fue ingresada el 23 de agosto de 2019 y fue notificada el 6 de abril de 2020.

Agrega que su parte dedujo en el referido juicio, un incidente de nulidad de todo lo obrado, pues por un hecho que no le era imputable al demandado, no llegaron a sus manos copias de la demanda ejecutiva y del mandamiento de ejecución y embargo, señalando que no era posible que no hubiese nadie en el inmueble, como afirma la receptora, porque el día de la notificación la empresa se encontraba funcionando, estaban atendiendo pacientes, por lo que había gente entrando y saliendo del domicilio, además que la receptora no agregó esta actuación dentro de 2 días como lo establece el artículo 9° de la Ley N°20.886 sino que lo hizo 14 días después, aumentando la indefensión de su parte. Se solicitó además que se recibiera el incidente a prueba.

Sin embargo este fue resuelto sin recibirse a prueba, aduciendo que los hechos certificados por el Ministro de Fe se reputan verdaderos, y reprochando la ausencia de prueba en contrario que



pudiese haber aportado el ejecutado, en circunstancias que el mismo tribunal decidió no recibir la causa a prueba.

Luego, la parte ejecutante ha continuado con la tramitación de este juicio, solicitando paralelamente dos medidas de apremio, el embargo de bienes de la ejecutada y el arresto del representante legal de la misma. El 1 de junio de 2020 se le concede el embargo de bienes de la ejecutada con fuerza pública, reiterado el 21 de marzo de 2022. En tanto, después de muchas peticiones, el 18 de abril del presente año se decreta orden de arresto contra el amparado, por la suma ya referida de \$63.967.399.

Señala que se ha cometido una ilegalidad afectando la libertad personal y seguridad individual del amparado por las siguientes razones: 1) Porque se decretó la orden de arresto del representante legal de la sociedad demandada, en circunstancias que se decretó otra medida de apremio que no ha sido ejecutada, esto es, la traba de embargo sobre bienes del ejecutado, y siendo la de arresto una medida de última ratio; 2) Que el excesivo tiempo transcurrido desde que la deuda se devengara, hasta su cobro efectivo no es imputable a la demandada y por ende la orden de arresto resulta arbitraria. Cita fallo dictado por la Corte Suprema en causa Rol 2851-2022, en tal sentido; 3) Además, la orden resulta arbitraria, considerando los variados vicios en que se incurrió en la notificación de la demanda, lo que le impidió al ejecutado alegar excepción de prescripción dentro de plazo legal, y por cuanto en su incidente tampoco se le permitió rendir prueba. Señala que esa arbitrariedad no fue corregida por la Corte de Apelaciones cuando conoció de recurso de apelación interpuesto en su momento contra la resolución que rechazó incidente que recibió la causa a prueba. 4) Por último, cita la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7° que proscribe la detención por deudas.

Pide se deje sin efecto la orden de arresto referida o en su caso disponer una orden de arresto nocturno en el domicilio del recurrente, o lo que SS Iltma. estime procedente.

Acompaña documentos al recurso y solicita se ordene traer a la vista la causa de cobranza laboral individualizada en su recurso.

A folio 5 rola informe de la Jueza Titular del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, quien agrega a lo ya dicho, que el 15 de marzo de 2022 se certificó por la ministro de Fe del Tribunal que el ejecutado no opuso excepciones dentro del plazo legal, el que estaba venido, por lo que procedía aplicar el artículo 12 de la Ley N°17.322 y que no consta en autos que se haya opuesto excepción de prescripción.

Agrega que el monto adeudado se determina de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de Acta N°71-2016, que indica que el sistema informático es de uso obligatorio, sin que pueda el tribunal crear registros paralelos.



Concluye que el tribunal ha aplicado la normativa legal vigente y que la orden de arresto se decretó en un caso expresamente establecido en la ley, cual es el incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

A folio 6, se trajeron los autos en relación.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**Primero:** Que se debe considerar en primer lugar, que existen otras medidas de apremio contempladas en la ley para obtener el pago de la deuda por cotizaciones previsionales, como el embargo de bienes suficientes del ejecutado, las que fueron ordenadas en el juicio seguido contra el amparado, decretándose también el auxilio de la fuerza pública, no obstante que dicha medida no ha sido ejecutada, la orden de arresto no aparece necesaria, por ser de última ratio.

**Segundo:** Que tal como fue resuelto por la Excma. Corte Suprema en fallo dictado el 24 de enero de 2022 en causa Rol 2851-2022, en este tipo de procedimientos no es posible prescindir de la circunstancia de que la demora en la ejecución del cobro de la deuda, se debe exclusivamente a la tardanza del ejecutante en efectuarla, por lo que no es imputable al ejecutado.

**Tercero:** Que además en el presente caso el amparado ha acreditado que sufre de un problema de salud, cual es apnea del sueño, acompañando a su recurso un certificado médico en tal sentido, por lo que la ejecución de esta medida resulta ser peligrosa para su salud.

**Cuarto:** Que todas estas razones llevan a concluir que la orden de arresto decretada por resolución de dieciocho de abril recién pasado resulta ser ilegal.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, **se acoge** el recurso de amparo interpuesto en favor del ejecutado **Horacio Demetrio Valdivia Meza**, contra el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, y en consecuencia, se deja sin efecto la orden de arresto decretada en su contra, mediante resolución de 18 de abril de presente año, en causa Rit A-37-2019 caratulada “AFP Capital S.A. con Sociedad Valdivia Callehuanca y Compañía Limitada”.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y en su oportunidad, archívese.

**NºAmparo-955-2022.-**



En Valparaíso, treinta de abril de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por Ministra Presidente Eliana Victoria Quezada M., Ministra Suplente Claudia Elena Parra V. y Abogado Integrante Jose Luis Alliende L. Valparaíso, treinta de abril de dos mil veintidós.

En Valparaíso, a treinta de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

